

**PLANTEA INAPLICABILIDAD DE LA NORMA - INCONSTITUCIONALIDAD -
REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO**

Señor Juez del Juzgado en lo Civil en Documentos y Locaciones Vº Nominación

JUICIO: VOLKSWAGEN SA C/ RAMIREZ VALERIA DEL VALLE S/ Ejecución Prendaria -
EXPTE. 10293/18

ESTEBAN A. GIRAUDO, por la parte actora, a V.S. respetuosamente digo:

Que en debido tiempo y forma vengo a plantear recurso de revocatoria en subsidio en contra de la providencia de fecha 02.06.2022 que dispone "*SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 02 de junio de 2022.- Atento a la publicación en el Boletín Oficial en fecha 02/05/22 y la entrada en vigencia de la Ley 9.529 (modificatoria de la Ley 9.405) procédase a la suspensión, hasta el 31 de Diciembre de 2022 de la presente ejecución. PERSONAL.-*" por ser la norma citada manifiestamente inaplicable al caso, o si así no lo considerase V.S., solicito se la declare inconstitucional.

ANTECEDENTES

En fecha 06.04.2019, el demandado firma un contrato de prenda y adquiere un automóvil 0km .

En fecha 10.08.2017 el demandado cae en mora.

En fecha 20.09.2018 se inicia demanda con el objeto de ejecutar el contrato de prenda.

Posteriormente la ley 9405, suspende las ejecuciones prendarias y, vencida dicha ley, la legislatura de Tucumán, saca una nueva ley, la 9529 que viene a prorrogar la anterior, ya vencida, hasta el 31.12.2022,

(i) FUNDAMENTO INAPLICABILIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD

El planteo encuentra su fundamento en las consideraciones de hecho y derecho que se expondrán a continuación.

a. INAPLICABILIDAD

La norma citada por V.S. resulta inaplicable al caso, toda vez que su aplicación magnifica las consecuencias que el legislador quiso evitar y tuvo en miras para el dictado de la norma cuestionada. Es decir, que de su aplicación resultaría más daño para el accionado, que un beneficio.

En este sentido, la jurisprudencia de nuestra Excma. Cámara en Documentos y Locaciones Sala III° ha dicho,

"La norma en cuestión establece expresamente "Disponer la suspensión por ciento ochenta (180) días del inicio y/o prosecución de juicios o procesos judiciales ya iniciados de secuestros prendarios y/o ejecuciones prendarias, con alcances a todos aquellos ahorristas con domicilio en la Provincia de Tucumán y que suscribieron sus planes de ahorro en la Provincia y con anterioridad al 30 de Setiembre de 2019, que a la fecha del dictado de la presente Ley se encuentren en situación de decaimiento de planes, o de falta de pago de cuotas".

De la lectura de la ley citada surge que la suspensión de los términos se dispuso respecto a las ejecuciones prendarias que tienen como sustrato un contrato celebrado en virtud de la operatoria de "ahorro previo para fines determinados con garantía prendaria", operatoria en la que el monto garantizado se determina el día del vencimiento de las obligaciones del suscriptor según el precio del bien en cuestión en el mercado que las partes establezcan a ese efecto.

Del análisis de la cuestión planteada, cabe señalar que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento (cfr. art. 2 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación).

En efecto, la jurisprudencia se ha expedido indicando que la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (cfr. CSJN, Fallos: 299:167; 302:973 y 312:1098, entre otros), y las palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común (cfr. CSJN, Fallos: 306:796).

Así, conforme surge del análisis del texto normativo en cuestión, el alcance de la normativa no ofrece lugar a dudas en cuanto determina que la suspensión de los términos procesales tiene por objeto beneficiar a los suscriptores de planes de ahorro.

La conclusión arribada se encuentra reforzada con los fundamentos expuestos por los legisladores promotores del proyecto de ley, en los que se precisaron los siguientes: "La Defensoría del Pueblo de Tucumán a remitido a esta H. Legislatura un Informe Extraordinario en relación a la situación producida con los suscriptores/ahorristas de "Planes de Ahorro para fines determinados" contratados con las distintas Sociedades Administradoras que comercializan sus productos a través de las concesionarias de automóviles en la provincia. En dicho Informe Extraordinario, el Defensor del Pueblo da cuenta de la grave situación por la que están atravesando los suscriptores/ahorristas de "Planes de Ahorro para fines determinados", y recomienda a esta H. Legislatura la aprobación de un proyecto de ley que suspenda por 180 días del inicio y/o prosecución de juicios o procesos judiciales ya iniciados de secuestros prendarios y/o ejecuciones prendarias, con alcances a todos aquellos ahorristas con domicilio en la Provincia de Tucumán y que suscribieron sus planes de ahorro en la provincia y con anterioridad al 30 de septiembre de 2019, que a la fecha del dictado de la presente ley se encuentren en situación de decaimiento de planes, o de falta de pago de cuotas"(cfr.<https://www.legislaturadetucuman.gob.ar/consultaexpedientes/mostrarexpediente.php?expe=54-PL-21.pdf>).

Asimismo, con el fin de desentrañar la intención de los legisladores provinciales, cabe remitirnos a las expresiones del miembro informante de la

Comisión de Legislación General de la H. Legislatura de Tucumán en el debate parlamentario de la ley N°9405 de fecha 06/05/2021 (Orden del Día n° 12/116, asunto n° 4 - Expte. n° 54-PL-21), donde expresó: “A todas luces, somos conscientes de que este tipo de contrato de adhesión -como lo son los planes de ahorros- son absolutamente abusivos y trasladan el riesgo empresarial a cada uno de sus clientes, además de que ninguna autoridad, nacional o provincial, tiene control sobre el valor de las cuotas de estos planes... debemos suspender las ejecuciones de los beneficiarios - insolventes, ya a estas alturas- de los planes de ahorros en la Provincia de Tucumán”.

Como sabemos, los sistemas de plan de ahorro son un régimen que organiza a los ahorristas para la obtención directa o indirecta de bienes, basándose en el aporte mancomunado y el ahorro recíproco mediante la acumulación de capitales que recaudan las entidades autorizadas, en las que se dan los presupuestos técnicos y financieros que facilitan el logro de las aspiraciones particulares de los ahorristas; y mientras estos últimos (los suscriptores) se obligan a constituir, mediante contratos idénticos, un capital determinado o a determinar que se integra mediante entregas periódicas, las entidades de ahorro se obligan a administrar ese patrimonio común para realizar las adjudicaciones previstas a cada uno de los adherentes, al cumplirse las condiciones fijadas en los respectivos planes (cfr. CNCom., sala A, 14/12/2017, "Díaz, Sandra Elizabeth c. ALRA SA y otro s/ ordinario").

Todo lo reseñado, evidencia claramente que la suspensión del inicio y prosecución de los juicios y procesos judiciales ya iniciados de secuestros prendarios y ejecuciones prendarias en los alcances fijados prevista por la normativa provincial fue dispuesta con un fin tuitivo y eminentemente protectorio de un determinado colectivo de personas: los suscriptores/ahorristas de “Planes de Ahorro para fines determinados” de la Provincia.” CAMARA CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES - Sala 3 S/ EJECUCION PRENDARIA, Nro. Expte: 11210/19. Nro. Sent: 304 Fecha Sentencia 23/12/2021.

En este sentido, luce claro y evidente que la tutela pretendida por el legislador no es más que un acto político demagógico, esto, en virtud de que con la

norma en pugna el legislador no frena la inflación de nuestro país, tampoco mejora la economía de los tucumanos, ni la pérdida del valor adquisitivo de los salarios y mucho menos sirve para frenar la depreciación de nuestra moneda.

Por el contrario, la medida legislativa empobrece desde todos los puntos de vista al deudor, negándole la posibilidad de enfrentar la realidad y su estado de deuda haciéndolo vivir una ficción con un final catastrófico, donde la deuda por el transcurso del tiempo puede llegar a sumas imposibles de pago e incluso afectar bienes diferentes al prendado ya que este en muchas ocasiones no será suficiente para la cancelación de la deuda.

Entonces, ¿hasta cuándo el deudor debe ser ajeno a su realidad? No es menos cierto que muchas veces los suscriptores de planes de ahorro no cuentan con grado de instrucción suficiente que les permita tomar buenas decisiones financieras en relación a las obligaciones que asumen y mucho menos entender las consecuencias de la cesación de pago. Es aquí donde el legislador se aprovecha y yerra predicando una ficción contraria a los intereses del deudor y en miras de su propio interés político, intentando solapar el desastre económico en el que se encuentra inmerso nuestro país y nosotros como ciudadanos.

De este modo surge inevitable la interrogante ¿Qué pasará cuando el legislador deje de prorrogar esta Ley? ¿Se hará responsable de los daños que ocasionó con ella?.

De lo expuesto resulta claro que la Ley resulta inaplicable por ser contraria al espíritu por el cuál fue sancionada, es decir porque ocasiona mayor perjuicio que beneficio al ciudadano que intenta resguardar.

b. INCONSTITUCIONALIDAD

Ahora bien, para el hipotético caso que V.S. entienda que es aplicable la norma al caso que nos ocupa, planteo la inconstitucionalidad de la norma por las razones que se exponen a continuación.

FACULTADES DELEGADAS A LA NACIÓN

La norma en pugna resulta inconstitucional en virtud de que es contraria a la forma republicana de gobierno de nuestro país, y no observa lo normado por nuestra constitución, especialmente en los art. 31, 121, y concordantes, por cuanto las Provincias han delegado en la Nación la facultad de dictar las normas de fondo en materia civil y comercial.

Por esta razón, la provincia al pretender suspender las ejecuciones prendarias, se está inmiscuyendo y modificando una ley de fondo (la ley de prenda) que como ya lo dijimos, es materia delegada a la Nación.

Recordemos, que el contrato de prenda no solo se encuentra reglado por Ley especial sino también por nuestro código Civil y Comercial.

En este sentido, en numerosas ocasiones nuestro más alto tribunal nacional ha dicho:

“Que en cuanto al fondo del asunto, el recordado dictamen se apoya en los verdaderos fundamentos que ilustran el caso, con arraigo en los arts. 31, 67, inc. 11 y 108 de la Const. Nacional y la constante jurisprudencia allí citada.

Que consagrada en ésta la unidad de la legislación civil como consecuencia de la unidad política de la República, no cabe admitir que los Estados autónomos puedan destruir aquélla, al dictar sus instituciones, concediéndose los mismos privilegios o exenciones al margen de la legislación general (art. 31, citado).

Que los plazos extraordinarios acordados a las provincias por las legislaciones locales para que puedan hacerse efectivos en sus bienes los créditos reconocidos legalmente, afecta la estructura del Código Civil que no ha creado beneficio alguno al respecto en favor de las personas jurídicas sobre que legisla, estableciendo, por el contrario, una perfecta igualdad entre aquéllas y los simples particulares” "González C/ Provincia de Santiago del Estero" - CSJN - 03/12/1930

En el mismo fallo, el procurador general, ya había dicho, y en el mismo sentido falla la Corte, “En cuanto al fondo de la cuestión debatida en autos, cabe advertir que V.E. tiene ya establecida jurisprudencia al respecto al resolver entre

otros casos análogos, el que se registra en la p. 88 del t. 147, en la colección de sus Fallos. En efecto, en dicho fallo recordó V.E. "que como lo ha declarado esta Corte, de acuerdo con el art. 108 de la Constitución, las provincias no ejercen el poder delegado de la Nación, y no les está permitido dictar los Códigos Civil, Penal, Comercial y de Minería, después que el Congreso los haya sancionado, precepto que no deja lugar a duda en cuanto a que todas las leyes que estatuyen sobre las relaciones privadas de los habitantes de la República, siendo del dominio de la legislación Civil o Comercial, están comprendidas entre las facultades de dictar los Códigos fundamentales que la Constitución atribuye exclusivamente al Congreso"

DERECHO DE PROPIEDAD

En este sentido, ya se ha expresado el más alto tribunal de nuestro país diciendo "El derecho adquirido tiene, como característica común de las numerosas doctrinas que han querido explicarlo, la de un derecho ingresado al patrimonio que lo identifica con la propiedad, comprensiva de todo aquello que forma el patrimonio del habitante de la Nación, trátase de derechos reales o personales, de bienes materiales o inmateriales. La mera expectativa o simple esperanza es, en cambio, una facultad no ejercida, que no puede ser alcanzada por la protección anterior (Voto del Doctor Luis María Boffi Boggero). Russo, Angel y otra c/ C.de Delle Donne, E. s/ desalojo SENTENCIA.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN., 15/5/1959.

Consecuentemente, negarle a mi mandante la posibilidad de hacer efectivo su derecho, implica una arbitrariedad y una grave afectación de su patrimonio, pues la postergación en el ejercicio de sus derechos implica una negación de las garantías constitucionales reconocidas, especialmente por los art. 14 y 17 de nuestra constitución y de toda la doctrina y jurisprudencia de nuestro país.

En este sentido, la norma es inconstitucional por cuanto arremete sin reparo en contra de las garantías constitucionales establecidas en los art. 17 y 14.

IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES

Por otro lado, es también contrario a nuestro ordenamiento jurídico, la norma en pugna por cuanto aplica de manera retroactiva una Ley y afecta de este modo derechos amparados constitucionalmente.

En este sentido, el art. 7 de nuestro Código Civil y Comercial dispone, "Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales.

Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo."

Veamos, a partir de la celebración del contrato de prenda mi mandante adquirió un derecho real de garantía, y el demandado obligaciones, ante el incumplimiento del obligado mi mandante intenta hacer efectivos sus derechos crediticios y no puede por la aplicación de esta Ley, que es posterior y que cercena los derechos de mi mandante y sus posibilidades de hacer efectivo el cobro de la deuda.

Así, la doctrina de nuestro país ya se ha expedido al respecto diciendo "La irretroactividad de la ley (...) En un sistema republicano como el nuestro esto es esencial porque si el legislador se arrogara la facultad de gobernar el pasado e introducir modificaciones en lo ya acontecido se caería en una gran inseguridad jurídica. Nadie estaría seguro si lo realizado en el presente podría ser afectado por una ley posterior. En definitiva la irretroactividad de la ley se impone para sustentar el principio de seguridad y firmeza de las relaciones jurídicas.

Respecto de la última referencia de la oración "La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales", entendemos que resultó sobreabundante dado que es claro que ninguna norma puede afectar derechos amparados por la Constitución, esté o no

mencionado en el artículo en estudio, el legislador carece de atribuciones constitucionales para desconocer derechos garantizados por la Constitución Nacional. Cabe aclarar que tal protección se extiende a todos los derechos, sean o no patrimoniales." CAROLINA DELL' OREFICE, HERNÁN V. PRAT, 1 de Octubre de 2015, www.infojus.gov.ar .

"Cuando una situación de crisis o de necesidad pública exige la adopción de medidas tendientes a salvaguardar los intereses generales, se puede sin violar ni suprimir las garantías que protegen los derechos patrimoniales, postergar, dentro de límites razonables, el cumplimiento de obligaciones emanadas de derechos adquiridos. No se trata de reconocer grados de omnipotencia al legislador ni de excluirlo del control de constitucionalidad, sino de no privar al Estado de las medidas de gobierno que conceptualice útiles para llevar un alivio a la comunidad. En esencia se trata de hacer posible el ejercicio de facultades indispensables para armonizar los derechos y garantías individuales con las conveniencias generales, de manera de impedir que los derechos amparados por esas garantías, además de correr el riesgo de convertirse en ilusorios por un proceso de desarticulación de la economía estatal, puedan alcanzar un grado de perturbación social acumulada, con capacidad suficiente para dañar a la comunidad nacional.

Cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos, ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que puede hacerse de esa propiedad, no hay violación del art. 17 de la Constitución Nacional, sino una limitación impuesta por la necesidad de atenuar o superar una situación de crisis. En el sistema constitucional argentino, no hay derechos absolutos y todos están subordinados a las leyes que reglamenten su ejercicio.

El fundamento de las leyes de emergencia es la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas, como una forma de hacer posible el

cumplimiento de las obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto.

En situaciones de emergencia o con motivo de ponerles fin, se ha reconocido la constitucionalidad de las leyes que suspenden temporalmente los efectos de los contratos libremente convenidos por las partes, siempre que no se altere su sustancia, a fin de proteger el interés público en presencia de desastres o graves perturbaciones de carácter físico, económico o de otra índole.

Corresponde reconocer la constitucionalidad de las leyes que suspenden temporalmente tanto los efectos de los contratos como los efectos de las sentencias firmes, siempre que no se altere la sustancia de unos y otras, a fin de proteger el interés público en presencia de desastres o graves perturbaciones de carácter físico, económico o de otra índole.

La distinción entre la sustancia de un acto jurídico y sus efectos contribuye a la transparencia de la doctrina de la legislación de emergencia, admitiendo la constitucionalidad de la que restringe temporalmente el momento de ejecución del contrato o la sentencia, manteniendo incólume y en su integridad la sustancia de los mismos, así como la de los derechos y obligaciones que crean o declaran.

El ejercicio del poder público sobre personas y bienes tiende en nuestro país a la protección no sólo de la seguridad, la moralidad y la salubridad, sino que se extiende al ámbito económico y social en procura del bienestar general.

En momentos de perturbación social y económica y en otras situaciones semejantes de emergencia y ante la urgencia en atender a la solución de los problemas que crean, es posible el ejercicio del poder del Estado en forma más enérgica que la admisible en períodos de sosiego y normalidad.

La "temporiedad" que caracteriza a la emergencia, como que resulta de las circunstancias mismas, no puede ser fijada de antemano en un número preciso de años o de meses. Todo lo que cabe afirmar razonablemente es que la

emergencia dura todo el tiempo que duran las causas que la han originado. Sumario, fallo Peralta 1990- <http://www.biblioteca.jus.gov.ar/fallo-peralta.html>.

(ii) MEDIDA CAUTELAR DE SECUESTRO

Para el hipotético y poco probable caso que V.S. considere que la norma es constitucional y que resulta aplicable al caso, solicito se resuelva la medida cautelar peticionada por esta parte en presentación de fecha 23.05.2022.

Ello, en virtud de que,

i. MEDIDA CAUTELAR NO INSTA EL PROCESO

El proceso cautelar tiende a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretenda obtener a través de un proceso (de conocimiento o ejecución), pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre su iniciación y el pronunciamiento de la sentencia que le pone fin (Palacio, Lino E. Manual de Derecho Procesal Civil, p. 78, Ed. 2000)

Este tipo de proceso fue creado por el legislador teniendo en cuenta que la satisfacción instantánea de una pretensión es improbable, y por lo tanto era necesario crear una figura que permita asegurar de cierto modo, el cumplimiento de la sentencia que pudiera recaer ya que de otro modo y en virtud del tiempo que transcurre entre la interposición de la demanda y la sentencia definitiva la pretensión puede tornarse irrisoria o de cumplimiento imposible. Esto, puede ocurrir en el caso que desaparecieran los bienes, disminuyese la responsabilidad patrimonial del presunto deudor o se operase una alteración del estado de hecho existente al tiempo de interponer la demanda.

Así, teniendo en cuenta que en autos, el proceso versa sobre la ejecución de un contrato de prenda impago, cuya garantía es el automotor prendado que está en poder de la contraria, morosa porque dejó de pagar las cuotas hace ya más de dos años, y que no solo pierde valor por el paso del tiempo, sino que también lo hace por el desgaste producido por el uso, y que encima, se encuentra asumiendo riesgos por circular sin seguro (porque el seguro se paga junto con la cuota, morosa

hace dos años), y sujeto a potenciales embargos de terceros acreedores, como DGR, por impuesto automotor.

De esta manera, a los efectos de poder hacer efectiva la garantía real, es decir, su privilegio para el cobro del crédito que le es debido, el bien sobre el cual recae debe existir, debe ser hallado y debe estar en buenas condiciones, de lo contrario carecería de sentido el privilegio consagrado por la ley de prenda.

Recordemos también que la ley de prenda, es nacional y de fondo, y prevé el secuestro del automotor, por lo que es al menos, rayano a lo inconstitucional, el texto de la ley 9405 y 9529, que vienen a suspender plazos y procesos relativos a facultades delegadas a la nación.

Ahora bien, cabe destacar que a diferencia de la hipoteca donde el privilegio recae sobre un bien inmueble e imposible de movilizar y que por la naturaleza económica de nuestro país, se aprecia con el tiempo; en este caso recae sobre un bien mueble, de valor depreciativo, que por sus características, es de riesgo, sometido a potenciales siniestros que en ocasiones pueden ocurrir, ya sea por culpa o dolo del conductor y como consecuencia en cuestión de segundos el automóvil puede perder su valor e incluso destruirse perjudicando a mi mandante y su crédito.

En numerosas oportunidades se ha dejado en claro que el proceso cautelar no tiene virtualidad suficiente para instar el proceso principal ya que constituye una medida precautoria y que es un proceso independiente aunque trámite conjuntamente con el proceso principal.

La jurisprudencia de nuestro más alto tribunal provincial ha dicho² “ (...) las actuaciones procesales tendientes a obtener medidas cautelares, no constituyen actos interruptivos del curso de perención en el proceso principal aunque el proceso cautelar se trámite conjuntamente con éste.” Corrales, Carlos Edgardo y otros vs. Credi-Inversión S.A. s/ Especiales. Casación, CSJT, sentencia n° 188 del 25 / 3 / 96.

En igual sentido Sentencia nº 23 recaída en : "Díaz Vda. de Coccioli, Marta Vs. Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores s/ nulidad de acto administrativo", Fallo del 13 / 02 / 02.

En la misma línea se han expedido las cámaras en sus diferentes salas. " Es conocido y reiterado el criterio doctrinario y jurisprudencial de que las medidas cautelares no importan una causal suspensiva del curso de la perención por cuanto no impiden la realización de actos impulsorios del proceso principal ni instan ellas el curso de la causa (Alsina, "Tratado", T.II, p. 173; Palacio, "Derecho Procesal Civil", T.II, p. 60; CCCCIa. Tuc. "Cassera c/Falivene", 26/12/86). Y tampoco interrumpen el curso de la caducidad pues su trámite es independiente de la sustanciación del principal. Pero sobre todo, no activan el proceso principal ni integran su dinámica, ni afectan el trámite específico de la causa (SCBA JA 1960-III-77; SC Mendoza, LL 105-516; LL 1982-C-458; CCCC S. Ia., Sent. nº 82/92, 20/5/92). Aplicando tales principios se colige que las actuaciones versaron sobre la medida de embargo solicitada como cautelar en el escrito introductorio de los presentes actuados y concedida por providencia. Ello dio lugar al pedido de eximición de caución juratoria al rechazo por providencia de tal solicitud, a la caución prestada, al posterior libramiento de mandamiento a la Oficina de Oficiales de Justicia para la notificación del embargo dispuesto y a la diligencia notificatoria. La totalidad de tales actuaciones refieren al embargo dispuesto, por lo cual en modo alguno se vinculaban al avance del proceso." DRES.: COURTADE - FAJRE. CAMARA CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES - Sala 1 S/ COBRO EJECUTIVO Nro. Sent: 502 Fecha Sentencia 28/12/2012 CADUCIDAD DE LA INSTANCIA: ACTUACIONES RELATIVAS A MEDIDAS CAUTELARES. NO TIENEN EFECTO INTERRUPTIVO. Acerca de la eficacia de las medidas cautelares para interrumpir los plazos en curso, se ha de tener presente que por su naturaleza, se trata de actos tendientes a asegurar bienes o mantener situaciones de hecho existentes al tiempo de la demanda, para asegurar el cumplimiento de una eventual decisión favorable, por lo que no tienden al avance del proceso sino a la tutela de un interés particular. Las distintas Salas del tribunal han negado eficacia interruptiva del plazo de caducidad, a las actuaciones relativas a una

medida cautelar, sobre la base de que su trámite no constituye impedimento para la prosecución del juicio.- DRES.: DAVID - AVILA. CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 1 S/ MEDIACIÓN Nro. Sent: 512 Fecha Sentencia 30/11/2017.

ii. REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR

Por otro lado, por medio de la presentación anterior en cual se peticiona la medida cautelar esta parte ya acreditó de manera suficiente los extremos exigidos por Ley para la procedencia de la medida cautelar, es decir peligro en la demora, la verosimilitud en el derecho y ofreció contracautela.

iii. MEDIDA CAUTELAR - SECUESTRO

Luego de haber aclarado que lo que esta parte persigue es una medida cautelar y que dicha medida como tal no insta el proceso ni se encuentra vedada por Ley, corresponde aclarar que la medida peticionada es el secuestro del bien prendado.

Tiene dicho la doctrina que este tipo de medida “ tiende a preservar la integridad o evitar el uso de la cosa que constituye materia de un litigio actual o futuro y recae, por lo tanto, sobre el objeto mediato de la pretensión principal ya interpuesto o que se ha de interponer.” Lino E. Palacio, Derecho Procesal Civil, Tomo VIII Procesos Cautelares y Voluntarios pag. 116, 2a ed. - Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2011.

En concordancia con la doctrina, el propósito de mi mandante es lograr resguardar el bien sobre el cual tiene privilegio para hacer efectivo el pago de su crédito.

Esto, a los efectos de preservar y resguardar el bien de un mayor deterioro y de los riesgos propios del uso, para de este modo asegurar el cobro de las sumas que le son debidas. Esto, ya que por más que exista actualmente en vigencia una norma que prohíbe a mi mandante ejercer sus derechos de acreedor, la deuda existe, es real y continuará devengando intereses hasta su efectivo pago.

En este sentido, la jurisprudencia dijo “ Sin desconocer de la excepcionalidad de la medida de “ secuestro” solicitada por la actora, adelanto que ésta luce como la más idónea en orden a asegurar el resultado de la presente litis, toda vez que el automóvil objeto de este proceso es el bien cuyo secuestro se persigue, ponderando que el mismo subsiste registralmente a nombre de la parte actora, conforme se encuentra acreditado con el informe de dominio adjuntado, y que conforme a los dichos de la recurrente estaría en posesión del accionado. Pondero asimismo que de los términos del intercambio epistolar surgiría acreditado prima facie y sumariamente -propio de esta instancia cautelar-, un reconocimiento expreso de las cuotas impagas por el demandado lo que podría configurar un incumplimiento de la principal prestación a su cargo en función del tiempo transcurrido”.-DRES.: ZAMORANO - RUIZ. de la principal prestación a su cargo en función del tiempo transcurrido.-DRES.: ZAMORANO - RUIZ.

iv. DEBER DE RESOLVER

En segundo lugar, y conforme se infiere del código procesal vigente, artículos 218 y ss, las medidas cautelares pueden ser solicitadas, antes de la iniciación del proceso, o durante el mismo, ante juez competente, y excepcionalmente, ante un juez incompetente. Ante el pedido de la parte, y posterior verificación de los requisitos de admisibilidad de la medida, el juez, debe dictar un acto resolutivo, donde previa valoración de la verosimilitud del derecho, y peligro en la demora, resuelva, motivadamente, si otorga o no la cautelar solicitada.

Todo pedido de medida cautelar, debe finalizar con una resolución motivada. Esta sentencia, dará lugar a la parte peticionante (art. 223) a la vía recursiva pertinente.

De lo contrario, sería una clara violación a la estructura esencial del proceso causal de nulidad absoluta e insubsanable.

Por todo lo expuesto, solicito se revoque el proveído impugnado. Para el hipotético y poco probable caso que V.S. entienda lo contrario dejo planteado recurso de apelación en subsidio.

PETITORIO

-Se tenga por interpuesto en debido tiempo y forma recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

-Oportunamente se haga lugar a la impugnación y se revoque el proveído impugnado.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.